

La universidad, al borde del precipicio

Desmantelar la educación pública

Rebeca González Serrano

🐦 @QuecaGonsery

Olmo Masa de Lucas

🐦 @OlmoMoL

Jheysson Salas Velandia

🐦 @JheyssonSalas

🌐 <http://estudiantesenmovimiento.org/wp-content/uploads/2013/08/An%C3%A1lisis-RD-becas.pdf>

Activistas estudiantiles y miembros de Estudiantes en Movimiento

Con la puesta en marcha de los programas de austeridad como respuesta a la crisis económica, la involución en derechos sociales, políticos, económicos y culturales está siendo catastrófica. Los servicios públicos han sido los primeros en sufrir este desmantelamiento, que está ocasionando un sufrimiento generalizado en la población. Derechos tan básicos como la sanidad, la educación y el empleo han padecido una privatización y precarización inconmensurables.

En el ámbito educativo, el ataque del Partido Popular no ha dado tregua. En primer lugar, se ha fijado el objetivo de limitar el acceso a la Educación Superior mediante la combinación de dos factores: incremento de tasas y reducción del presupuesto y acceso a las becas. Y en segundo lugar, han cambiado las estructuras de decisión y control de las instituciones educativas por modelos de gestión y lógicas empresariales.

El mecanismo de la subida de tasas es, a día de hoy, la principal causa de abandono de los estudios. Un informe del Observatorio del Sistema Universitario desvela que, por ejemplo en Catalunya, se han incrementado entre un 69% y un 291% entre 2007 y 2013, en términos reales. Se calcula que, en el curso 2012-13, la cifra de personas en riesgo de abandonar los estudios o de impago de matrículas rondaba las 30.000 en todo el país.

Un primer paso fue el decreto 14/2012 de medidas para la racionalización del gasto público, que incrementó la ratio de alumnos por clase, aumentó la jornada laboral, suprimió la obligatoriedad de ofrecer más de dos modalidades de Bachillerato y dio vía libre a la eliminación de grados. Posteriormente vendría el 609/2013, que supuso una reducción de la cuantía de las becas y número de becados. La dotación económica se ha reducido de media 300 euros, y el número de becados ha caído en torno a un 15% en comparación con el curso 2012-13. En la misma lógica, las becas Erasmus y Séneca han sido recortadas y eliminadas, respectivamente.

Ante esto, el Gobierno se encuentra en un terrible dilema. Por un lado, tiene que acometer las reformas, tremendamente impopulares. Pero por otro, teme que, ante una situación en la que muchos

jóvenes se ven sin perspectivas de futuro ni ascenso social, o directamente expulsados de la universidad, se movilizan y solidarizan con los que ya no tienen futuro. Y, ante un duro ataque a la universidad y la educación en general, empiecen a plantearse que quizás la conclusión principal no es “qué malo es el Gobierno que me quiere echar de la universidad”, sino que “me echa de la universidad, me endeuda, o me pone piedras en el camino porque hay una relación entre el modelo de universidad y el modelo de sociedad”. Y este es un debate sistemáticamente silenciado, ya que es potencialmente peligroso para el poder.

Objetivo: beneficiar a grandes empresas

Otro de los aspectos cardinales es la reforma universitaria. No sabemos a ciencia cierta si se materializará realmente, si se aprobará una nueva ley universitaria o, como parece más probable, se reformará la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Universidades (LOMLOU) en determinados puntos esenciales mediante reales decretos o proyecto de ley. Lo que sí sabemos es que existe una hoja de ruta para dar una nueva vuelta de tuerca en el proceso de privatización endógena de nuestras universidades y que, con independencia de que haya una reforma formal o no, hay una reforma material del sistema universitario. Esta reforma viene a profundizar el papel de la Enseñanza Superior en el sistema productivo, enfocado a una desigualdad latente que pretende beneficiar a grandes empresas a costa del deterioro del sistema público educativo y del nivel de conocimientos que componen la universidad.

El informe de expertos publicado en 2013 por el Ministerio es una declaración de intenciones en torno a los pilares sobre los que debe girar la reforma universitaria. Respecto al personal docente e investigador (PDI), cabe señalar la tendencia a la desfuncionarización a través de la liberalización de criterios de acreditación para el profesorado contratado y del endurecimiento de estos para el profesorado funcionario. Así, se propone la implantación de un modelo importado de la universidad americana, los *tenure track*, formas de contratación a doctores con menos de 10 años de antigüedad para un periodo de cinco años, prorrogable indefinidamente si la universidad estima que se han cumplido los criterios y se ha realizado una elevada investigación científica. Se persigue dar vía a la libre contratación y despido de profesores por las universidades, de manera que compitan entre sí en un mercado marcado por la desigualdad económica entre campus públicos y privados, quedando claramente perjudicados los primeros.

Precariedad del profesorado

También se mantienen las condiciones de precariedad del profesorado más joven en modalidad de ayudantes y asociados. Asimismo, otra de las propuestas estrella es la importación de las *named chairs*, también de origen americano, que consisten en cátedras financiadas por el sector privado, que subvenciona la parcela de conocimiento que más le interesa. Un ejemplo práctico del horizonte de esta reforma es la reciente creación de la cátedra “Burger King” en innovación y tecnología aprobada en la Universidad de Extremadura, lo que supone una fuente de creación de trabajadores precarios y de monitorización del sistema público educativo por parte de las empresas.

Otro de los ejes de la reforma es el de la “calidad”. La cuestión fundamental en este ámbito es la pretendidamente nueva concepción de la calidad basada en la investigación. La universidad española ya es el principal agente de nuestro país en la producción de investigación de impacto internacional, con un 27% del presupuesto de I+D y un 33% de trabajadores de este sector. La cuestión no debe ser si se necesita más investigación, sino qué investigación y para qué. Se afirma que hace falta más investigación sin tener en cuenta que en 2010 solo se ejecutó un 69% del presupuesto destinado a I+D, en un contexto en el que nuestro sistema productivo está cada vez más cercano al subdesarrollo y donde el máximo exponente del mundo de la empresa que se interesa por la producción

investigadora universitaria es Burger King. La apuesta mil veces mencionada de los expertos por la investigación, en lugar de por la docencia, más bien parece una cortina de humo para ocultar sus verdaderas intenciones: desplazar la cuestión de la calidad de la docencia para así justificar un desmantelamiento de la red pública de universidades.

Esto supone fundamentalmente el estímulo y sanción financiera a las universidades en función de sus resultados en investigación, la especialización de los campus en determinadas ramas de conocimiento, y la creación de una red paralela de primera y de segunda.

En cuanto a la gobernanza, los expertos se marcan objetivos que vendrían a remodelar todo el procedimiento mínimamente democrático que se ha conseguido en las universidades.

Endeudarse para estudiar

Otra cuestión fundamental es la de las becas-préstamo. A falta de becas, y ante unas matrículas tan elevadas, a los estudiantes no les queda más opción que contraer créditos que deberán reembolsar a la entidad financiera una vez terminados los estudios con los consiguientes intereses. Además del modelo de préstamos, se propone un sistema de high-tuition, high-aid model (matrículas altas, modelo de becas alto). Sin embargo, lo que demuestra este sistema implantado en EE.UU., uno de los ejemplos de deuda estudiantil más elevada, es que de cada dólar que se han incrementado las tasas, sólo ha habido 60 centavos de aumento en las ayudas, con lo que se ha disparado el coste neto de la Enseñanza Superior para estudiantes y familias, disparándose la burbuja de deuda del alumnado.

La reforma universitaria concreta en la universidad el programa de ajuste estructural que se está dando en todos los servicios públicos por parte de las grandes empresas y entidades corporativas que manejan la economía del país y de la Unión Europea.

Aunque el panorama sea tan desolador y complicado, desde el movimiento estudiantil tenemos clara una consigna: "Sí se puede". Y con la movilización social y estudiantil podremos conseguir que la educación sea un derecho universal, gratuito y de carácter público. Es la hora de que la juventud se rebele y plante cara para construir un país con derechos y justicia social.